

Programas sociales, microcréditos y desarrollo rural post-violencia política en Apurímac, Perú

Guido ChatiDocente. Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, Perú.  <https://dx.doi.org/10.5209/redc.99472>

Recibido: 04 de diciembre de 2024 • Revisado: • Aceptado: 17 de febrero de 2025

Resumen: El artículo analiza la sostenibilidad de los programas sociales destinados a mejorar las condiciones de vida en zonas rurales afectadas por la violencia política, utilizando como caso de estudio la CAC Los Andes. Esta cooperativa, surgida de programas sociales implementados entre 1995 y 2000, logró expandirse y consolidarse como un actor clave en el desarrollo rural de Apurímac, Perú. Su enfoque integra la economía solidaria con programas sociales ejecutados en colaboración con Organismos No Gubernamentales, priorizando el bienestar de las comunidades y buscando armonizar políticas públicas con dinámicas cooperativas en contextos de exclusión social.

Palabras clave: Post-violencia política, Microcréditos, Cooperativa, CAC Los Andes, desarrollo rural.

ENGLISH **Social programs, microcredits, and rural development post-political violence in Apurímac, Peru**

Abstract: This article examines the sustainability of social programmes aimed at improving living conditions in rural areas affected by political violence, using CAC Los Andes as a case study. This cooperative, which emerged from social programmes implemented between 1995 and 2000, has successfully expanded and established itself as a key actor in rural development in Apurímac, Peru. Its approach combines a solidarity-based economy with social programmes implemented in partnership with Non-Governmental Organisations, prioritising the well-being of the community and seeking to reconcile public policies with cooperative dynamics in contexts of social exclusion.

Keywords: Post-political violence; microcredits; cooperative; CAC Los Andes, rural development.

FRANÇAIS **Programmes sociaux, microcrédits et développement rural post violence politique à Apurímac, Pérou**

Résumé: Cet article analyse la durabilité des programmes sociaux visant à améliorer les conditions de vie dans les zones rurales touchées par la violence politique, en utilisant la CAC Los Andes comme étude de cas. Cette coopérative, issue de programmes sociaux mis en œuvre entre 1995 et 2000, a réussi à s'étendre et à se consolider en tant qu'acteur clé du développement rural dans la région d'Apurímac, au Pérou. Son approche intègre l'économie solidaire à des programmes sociaux mis en œuvre en collaboration avec des Organisations non gouvernementales, en donnant la priorité au bien-être des communautés et en cherchant à harmoniser les politiques publiques avec les dynamiques coopératives dans des contextes d'exclusion sociale.

Mots-clés: Post-violence politique; microcrédits; coopérative; CAC Los Andes; développement rural.

Sumario: 1. Introducción. 2. Metodología. 3. Resultados. 3.1. El contexto social, financiero y la violencia política previo a los orígenes de la CAC los andes. 3.1.1. Breve mirada a Apurímac y sus provincias. 3.1.2. Cooperativas y el sector crediticio en Apurímac. 3.1.3. Violencia Política en Cotarusi, Aymaraes. 3.1.4. Repoblamiento y reconstrucción de Cotarusi y sus comunidades. 3.2. Origen de la CAC Los Andes y construcción institucional. 3.2.1. Los grupos solidarios de Cotarusi y los orígenes de la CAC Los Andes. 3.2.2. Crecimiento, logros y malestar durante la construcción cooperativa. 4. Discusión. 4.1. La Cooperativa y su estructura organizacional. 4.2. La democratización del capital y el crédito microfinanciero. 4.3. Cooperación interinstitucional y focos de desarrollo local. 4.4. Modelo cooperativo en contextos de regulación y desarrollo. 5. Conclusión. 6. Fuente de financiación. 7. Referencias bibliográficas.

Cómo citar: Chati, G. (2025): "Programas sociales, microcréditos y desarrollo rural post-violencia política en Apurímac, Perú", *Revista Española de Desarrollo y Cooperación (REDC)*, 52(1), pp. 167-177.

1. Introducción

En la actualidad, la industria microfinanciera se caracteriza por la existencia de un mercado altamente competitivo. Las ciudades, tanto las capitales regionales como sus provincias, se han saturado de entidades financieras, como cajas municipales, cajas rurales, Organismos no Gubernamentales (ONG) crediticias, cooperativas de ahorro y crédito, y entidades de desarrollo para la Pequeña y Microempresa (EDPYMES) (Trivelli, 2004, 2007). A pesar de que este sector financiero ha sido asociado con una contribución significativa en la reducción de la pobreza, esta aún persiste. La combinación de un mayor crecimiento económico y una focalización de programas y servicios destinados a los sectores más vulnerables no ha demostrado ser suficiente. Por ejemplo, en el periodo posterior a la violencia política causada por Sendero Luminoso (SL) y las Fuerzas Armadas (FFAA) en Apurímac y otras regiones del Perú, diversos organismos de cooperación internacional y el propio Estado han implementado proyectos de inversión social. Estos proyectos, algunos enfocados exclusivamente en finanzas con componentes de crédito y desarrollo rural, tenían como objetivo superar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1980 y 2000. Sin embargo, se conoce poco sobre los éxitos o fracasos de estas iniciativas.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Los Andes Cotarusi Aymaraes (CAC Los Andes) fue fundada en 2001 en un contexto rural, como parte de las iniciativas focalizadas de programas y servicios implementados durante el periodo post-violencia política. A diferencia de muchas entidades financieras urbanas, su enfoque se centra en programas sociales y microcréditos, con operaciones dirigidas principalmente a sectores agropecuarios y poblaciones rurales (Chatí, 2014).

Este artículo explora cómo los comuneros de cuatro comunidades campesinas de Cotarusi, en Aymaraes, Apurímac, lograron repoblar y reorganizar sus comunidades entre los años 1995 y 2000, y finalmente constituir la CAC Los Andes, después de haber enfrentado años de violencia derivados de la guerra subversiva y contra subversiva. Pese a las adversidades –poca tierra y capital, bajo nivel educativo, servicios públicos deficientes y despoblamiento–, estas comunidades formaron grupos solidarios y, con el apoyo de cooperantes, dieron vida a una cooperativa que se ha convertido en un actor clave para el desarrollo local.

El desarrollo rural ha sido ampliamente estudiado desde distintas perspectivas teóricas y prácticas. Varios teóricos han abordado este tema, considerando factores como la agricultura, la sostenibilidad, la participación comunitaria, y las dinámicas económicas y sociales. Escobar (2007) critica el concepto de desarrollo, incluyendo el desarrollo rural, como una construcción eurocéntrica que presenta lo rural como atrasado y restringido a la agricultura, excluyendo otros saberes y formas de organización local. Propone deconstruir este enfoque para revalorizar los conocimientos tradicionales, las dinámicas territoriales y las estructuras autóctonas, promoviendo alternativas más inclusivas y contextualizadas. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2018 y 2019), el desarrollo rural debe abordarse desde un enfoque que reconozca los espacios rurales como áreas dinámicas, que busque superar las visiones tradicionales que limitaban lo rural a la agricultura. Aunque el concepto de desarrollo ha evolucionado y se han incorporado objetivos sociales y ambientales que trascienden lo económico, persiste una lógica dominada por paradigmas occidentales (Arquer-Cuenca y Hernández-Peña, 2024).

Históricamente, las comunidades campesinas en Perú han enfrentado dificultades para lograr el desarrollo económico y la inclusión social, debido a la falta de marcos legales y formales que permitan convertir sus activos en capital al formalizar sus propiedades. En este contexto, De Soto (2000) propuso que la formalización de la propiedad facilita el acceso de pequeños agricultores y comunidades rurales a créditos y mercados más amplios. Este enfoque ha influido significativamente en los debates sobre políticas agrarias, propiedad de la tierra y desarrollo rural, aunque también ha sido criticado por simplificar los complejos desafíos culturales, históricos y sociales asociados a la tierra y su propiedad.

En los últimos años, las políticas públicas y la economía solidaria han logrado avances significativos. Montoya (2017) recopila investigaciones sobre iniciativas de economía social y solidaria como alternativa económica en el país. Por su parte, Ávalos (2023) y Azabache (2024) ofrecen una revisión sistemática sobre cómo las políticas de gestión pública impactan en el desarrollo sostenible e inclusivo. Además, el Estado ha establecido una hoja de ruta consensuada que integra iniciativas para fortalecer la economía solidaria y modernizar la gestión pública.¹ El impacto del microcrédito en el desarrollo económico ha mostrado efectos positivos, especialmente en la reducción de la vulnerabilidad en sectores menos vulnerables, aunque su alcance es limitado en los más vulnerables (Espinoza y Guzmán, 2023; Portocarrero *et al.*, 2002; Seijas-Giménez *et al.*, 2017). En Latinoamérica, Ortiz (2000) destaca el papel clave del Estado en promover la economía solidaria y los microcréditos para fomentar modelos económicos inclusivos.

Este trabajo tiene como objetivo analizar la sostenibilidad de los resultados de programas sociales dirigidos a mejorar las condiciones de vida en zonas rurales afectadas por la violencia política. Se examina el contexto microfinanciero y social de Apurímac, así como los orígenes y el crecimiento de la CAC Los Andes, con énfasis en el periodo 1995-2013 y una extensión al 2024. Además, se discuten la cultura organizacional y las compatibilidades del cooperativismo con el entorno rural.

2. Metodología

Dado que el objetivo principal de este estudio es analizar la sostenibilidad de los resultados de los programas sociales focalizados en las zonas rurales afectadas por la violencia política en Apurímac, se propone reconstruir la historia sobre el origen y crecimiento de la CAC Los Andes entre los años 1995 y 2013. Para

1 Acuerdo Nacional: "Políticas de Estado Visión del Perú al 2050 Consensos por el Perú". Disponible en: https://acuerdonacional.pe/wp-content/uploads/2024/01/Politicas_de_Estado_2023.pdf.

ello, se llevó a cabo un trabajo de campo en las comunidades de origen, así como en las agencias, oficinas y puntos de atención de la cooperativa, que están distribuidos en los distritos y comunidades rurales de las siete provincias de Apurímac.

Se emplearon diversas técnicas para la recolección de información, incluyendo la revisión de 13 boletines, 6 revistas, 9 memorias de gestión y archivos de la CAC Los Andes, todos rescatados y catalogados en su archivo. El análisis se sustenta en entrevistas profundas con actores clave: socios, familiares, directivos, personal ejecutivo y operadores de campo en las comunidades, distritos y las siete provincias de Apurímac. Para garantizar la integridad del análisis, las entrevistas fueron transcritas e incorporadas junto con notas de campo y boletines publicados por la cooperativa. Esto permitió obtener una comprensión más completa y detallada de las experiencias y percepciones de los entrevistados, recogidas en siete historias de vida y redactadas junto con la historia de la CAC Los Andes (Chati, 2014).

En términos de diseño de investigación, este estudio se enmarca dentro de una metodología cualitativa descriptiva, con el objetivo de proporcionar una visión detallada y contextualizada de la evolución de la CAC Los Andes, sus procesos internos y su impacto en las comunidades rurales. Este enfoque cualitativo permite captar las complejidades del fenómeno bajo estudio y ofrece una rica base de datos para el análisis de la sostenibilidad de los programas sociales implementados. Para el análisis estadístico, se emplearon métodos cuantitativos según la naturaleza de los datos. Además de la búsqueda inicial en las bases de datos, se identificaron, seleccionaron y revisaron estudios adicionales, como libros, reportes, proyectos e investigaciones de años anteriores, asegurando así una cobertura exhaustiva de la literatura relevante.

3. Resultados

3.1. El contexto social, financiero y la violencia política previo a los orígenes de la CAC Los Andes

3.1.1. Breve mirada a Apurímac y sus provincias

Apurímac ha sido históricamente una región agrícola, rural y pobre, con una economía basada principalmente en la ganadería en las zonas altas y la agricultura en áreas más cálidas. Las provincias del noreste de Apurímac, como Andahuaylas y Chincheros, tienen una fuerte producción de papa, cereales y frutas, además de un incipiente desarrollo agroindustrial en productos como harinas, lácteos y avícolas. Al sur, las provincias de Antabamba, Aymaraes, Cotabambas y Grau combinan la actividad minera con la agricultura, siendo la minería artesanal común en las zonas cálidas, mientras que en las áreas altas predominan la crianza de camélidos sudamericanos y el cultivo de tubérculos nativos (INEI, 2000; Revista CAC Los Andes, 2014).

Según INEI (2000), el nivel de pobreza en Apurímac es muy alto: 78% de su población está calificada como pobre y 47.4% se encuentra en pobreza extrema. Al año 2013, presenta un 55.5% de la población viviendo en condiciones de pobreza. Las provincias más afectadas son Cotabambas y Grau, donde la pobreza total alcanza el 81.9% y 78.3%, respectivamente, con tasas de pobreza extrema de 47.8% y 42.2%. En contraste, Abancay y Andahuaylas tienen las tasas más bajas de pobreza, con un 49.3% y 68.9%, y pobreza extrema de 15.0% y 26.5%, respectivamente (INEI, octubre de 2013).

3.1.2. Cooperativas y el sector crediticio en Apurímac

Las cooperativas no fueron un invento del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado promulgado con ley de reforma agraria en 1969, sino que están regidas por la Ley 15260, Ley General de Cooperativas, decretada en 1964 y perfeccionada por el Decreto Legislativo 85 de 1981 bajo el gobierno de Fernando Belaunde. Estas cooperativas siguen principios universales como la libre adhesión, el control democrático, la limitación de los intereses sobre los aportes de los socios, la distribución de excedentes y el fomento de la educación cooperativa. Su modelo busca una forma más sostenible de alcanzar la riqueza social, en contraposición al modelo capitalista tradicional. En noviembre de 1960, un grupo de sacerdotes fundó la Cooperativa de Ahorro y Crédito "San Pedro" en Andahuaylas, Apurímac (Chati, 2014). Durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, las cooperativas, especialmente las agrarias, se expandieron en Perú. Sin embargo, este proceso resultó en conflictos, deudas y corrupción, lo que llevó a la desaparición de muchas cooperativas y dejó al término "cooperativa" asociado con desconfianza, especialmente en el sector agrícola (Remy, 2007: 50-52). La resistencia campesina contra el modelo cooperativista se generalizó, especialmente durante los procesos de "toma de tierras", como ocurrió en Andahuaylas en 1974. En Aymaraes, la Cooperativa de Transportes El Condor de Aymaraes, fundada en 1969, también colapsó debido a las nuevas políticas económicas.

Durante la década de 1950, el Banco Agrario financió el sector agropecuario, y en los años 60, los créditos del Banco de Fomento Agropecuario crecieron considerablemente. Sin embargo, la banca de fomento desplazó a los bancos comerciales, y la ley de reforma agraria aceleró este proceso. Aunque los créditos con tasas subsidiadas por el Estado buscaban aumentar la producción agraria, los subsidios se volvieron insostenibles a fines de los 80, lo que llevó a una crisis económica en 1990 y grandes pérdidas estatales. Con la llegada de Alberto Fujimori al poder en 1990, se desmanteló la banca de fomento, comenzando con la liquidación del Banco Agrario en 1992. Como alternativa, se promulgó la ley de Cajas Rurales y Fondeagros asumió la tarea de otorgar créditos en insumos (Palacios, 2001: 75-77). La crisis económica y la desintegración del gobierno militar afectaron al sector asociativo, especialmente a las Cooperativas Agrarias de Producción (CAP) y las Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS). La violencia política, especialmente las acciones de Sendero Luminoso, contribuyó a la disolución de estas cooperativas. En los 90, los programas gubernamentales con créditos subsidiados no lograron resultados significativos, beneficiando principalmente a los agricultores

más modernos y aumentando la desigualdad. Además, la cobertura de los programas fue limitada, y los bancos de fomento se concentraron en ciudades o áreas con mayores recursos (Chatí, 2014).

A finales de los 90 y principios de los 2000, durante el proceso de reorganización de las comunidades tras la violencia política, los comuneros de Apurímac ya estaban familiarizados con prácticas cooperativas y de ayuda mutua. Por ejemplo, entre 1995 y 2000, en Cotarusi-Aymaraes, se promovió programas sociales relacionadas a “economía solidaria”. Cuando en 2001 se fundó la CAC Los Andes, los comuneros comprendieron rápidamente el concepto de la cooperativa (SOS Faim, 2001).

3.1.3. Violencia Política en Cotarusi, Aymaraes

Las zonas limítrofes con Ayacucho, como Cotarusi y sus comunidades (donde nace la CAC Los Andes), fueron afectadas por las acciones subversivas y contrasubversivas desde 1980. En Aymaraes y sus distritos, la violencia alcanzó su punto máximo entre 1987 y 1989, con Sendero Luminoso perpetrando atentados contra la propiedad pública y privada, asesinatos selectivos de autoridades locales, saqueos y robos de ganado. Entre los atentados más significativos se destaca la voladura de los puentes Antarumi y Santa Rosa, lo que dejó incomunicada una parte importante de la carretera Nazca-Abancay. En respuesta, el Estado declaró el estado de emergencia en Aymaraes y reforzó la presencia militar con Bases Contrasubversivas a cargo del Ejército. El ejército estableció cinco bases militares en Santa Rosa, Capaya, Chalhuanca, Quilcaccasa y Cotarusi para frenar el avance de Sendero Luminoso. Estas bases fueron responsables de numerosos abusos, destacando la de Capaya, que registró 47 desaparecidos, 58 muertos y 140 requisitoriados en Cotarusi (Defensoría del Pueblo, 2002). También se documentaron delitos graves, como detenciones arbitrarias, torturas, violaciones sexuales, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales (CVR, 2003, Tomo IV, sección 3).

Entre 1984 y 1987, las comunidades altas de Cotarusi, como Iscahuaca, sufrieron constantes incursiones de las FFAA y Sendero Luminoso. Los subversivos atacaron comunidades como Quilcaccasa, Mestizas, Totora y Pilluni, donde amenazaron autoridades, reclutaron personas, torturaron a quienes se resistieron y robaron ganado. Las fuerzas contrasubversivas realizaron incursiones similares. En 1986, los senderistas robaron ganado en Pampamarca y explosivos del campamento minero de Tumire. En 1987, SL asesinó autoridades, incendió locales comunales y el municipio, y secuestró al alcalde en varios pueblos de Cotarusi. La carretera Nazca-Abancay permaneció restringida por un año debido a la voladura de puentes en Cotarusi, Iscahuaca y Santa Rosa. Desde 1990, las fuerzas armadas asumieron el control territorial en Aymaraes, enfrentando y eliminando a columnas senderistas. En 1991, incendiaron Iscahuaca tras una emboscada subversiva que mató a autoridades. En 1992, los senderistas secuestraron y asesinaron a pobladores en la misma localidad. Entre 1990 y 1992, las bases militares de Quilcaccasa y Cotarusi incendiaron viviendas, saquearon granjas y destruyeron pueblos como Lahua Lahua e Izcuchaca, afectando gravemente a las comunidades rurales de Cotarusi (APRODEH, 2010).

Este contexto de violencia política obligó a los pobladores a tomar una difícil decisión: quedarse y enfrentar los abusos de las Fuerzas Armadas y Sendero Luminoso, o abandonar sus comunidades y perderlo todo. La mayoría migró a las ciudades, especialmente a la costa (Chala, Pisco, Nazca, Chincha y Lima), lo que provocó un notable despoblamiento de estas zonas.

3.1.4. Repoblamiento y reconstrucción de Cotarusi y sus comunidades

Durante el conflicto armado, el distrito de Cotarusi y sus comunidades sufrieron una profunda desestructuración. La violencia devastó la infraestructura, desplazó a familias y dejó un alto número de víctimas. A partir de 1994, bajo el liderazgo del alcalde Roberto Vicencio Ramírez, la Municipalidad de Cotarusi impulsó la reconstrucción del distrito. Organismos públicos y privados participaron en talleres de concertación y comités multisectoriales para coordinar el repoblamiento. En 1996, los desplazados comenzaron a regresar, y la reconstrucción se convirtió en una prioridad con el apoyo de cooperantes internacionales (Plan de desarrollo integral del distrito de Cotarusi, 2003).

Entre las instituciones que operaban en Cotarusi y sus comunidades se encuentran APRODEH, PROMUDE y PAR, que trabajaba en la rehabilitación de derechos civiles, participación ciudadana, y el saneamiento de los indocumentados y los retornantes. El Centro Bartolomé de las Casas se dedicaba al catastro y la formulación de planes de desarrollo local. Además, organizaciones como Runa Maqui, COOPOP, FONCODES y PRONAMACH aportaban en diversas áreas de desarrollo, cada una con un enfoque específico, contribuyendo a la rehabilitación y reconstrucción social, económica y política de la zona. El 6 de junio de 1996, se dio el primer retorno de desplazados a Cotarusi, cuando instituciones como IDCAA, FONCODES, PRONAA, PAR, Cáritas, PRASM, y la Municipalidad de Cotarusi, junto con una “comisión de retornos”, recibieron a 120 familias en comunidades como Iscahuaca, Totora, Lahualahua y Pisquicocha. En abril de 1997, la municipalidad y PRONAMACH promovieron viveros municipales, comunales y estudiantiles en varias zonas. En mayo de 1997, se organizó el segundo retorno de 70 familias y, en 1999, un tercer retorno con 60 familias. Mientras tanto, unas 200 familias retornaron de manera independiente, sin el apoyo directo de estas instituciones. A principios de 1998, se habían elaborado varios proyectos de desarrollo local, incluidos microcréditos para los retornantes, que continuó hasta los próximos años de 2000 (Memoria de gestión municipal de Cotarusi, 1998: 30-31). No obstante, la mayor parte de los fondos económicos asignados a las comunidades, como los del programa estatal FONCODES, se perdió sin posibilidad de recuperación.

IMAGEN 1. Retorno de desplazados por la violencia política, organizado por IDCAA (Pilluni – Mestizas, 1996)



Fuente: Archivo CAC Los Andes (2014).

3.2. Origen de la CAC Los Andes y construcción institucional

3.2.1. Los grupos solidarios de Cotarusi y los orígenes de la CAC Los Andes

En 1997, la Municipalidad de Cotarusi emprendió un “Plan de Desarrollo Socioeconómico” dirigido a los retornantes, priorizando proyectos productivos, apoyo a organizaciones comunales y registro ciudadano. Entre las iniciativas destacaron la crianza de truchas, biohuertos, fábricas de tejas y fortalecimiento agrícola. Sin embargo, estos programas enfrentaron problemas de sostenibilidad por el retiro de ONG, falta de apoyo económico y migración de pobladores hacia la costa. Para contrarrestar estas dificultades, se implementó un programa de créditos financiado por “SOS Faim” entre 1999 y 2000. El programa otorgó microcréditos rotatorios a comunidades campesinas, con prioridad para los desplazados retornantes, y se ejecutó bajo el marco institucional de IDCAA, una ONG con experiencia en microcréditos en Andahuaylas (Memoria de gestión municipal del distrito de Cotarusi, 1998).

Hasta octubre de 1999, las comunidades de Cotarusi, Colca, Iscahuaca y Pampamarca habían recibido fondos rotatorios de aproximadamente 34 mil soles cada comunidad. El modelo de trabajo se basaba en grupos solidarios de 3 a 14 comuneros, liderados por un presidente, tesorero y vocal. Estos grupos, formados por jefes de familia, buscaban mejorar la calidad de vida de sus hogares y actuaban como fiadores solidarios, respaldados por su grupo y la comunidad. Cada grupo solidario accedía a préstamos que oscilaban entre 2 mil y 9 mil soles, distribuidos entre los miembros en montos individuales de 100 a 1,500 soles, destinados a financiar actividades orientadas a fortalecer la economía local y familiar.

TABLA 1. Comunidades campesinas, fondos otorgados por SOS Faim y administrados por IDCAA-2000

Comunidad	Grupo Solidario	Nº integrantes por grupo	Fondo económico en soles (s.)		
			Fondo otorgado	Fondo total	Fondo total por comunidad
Pampamarca	1	4 a 7 campesinos	3,600	3,924	S/. 18.644
	2		6,000	6,540	
	Promesa		6,200	6,758	
Colca	Los Ángeles	7 campesinos	3,500	4,130	S/. 20,060
	Ayapaya		3,500	4,130	
	Wañakak		3,000	3,540	
	Chacchuhuacho		3,500	4,130	
	Alaspurquio		3,500	4,130	
Iscahuaca	1	5 campesinos	4,500	4,720	S/. 21,476
	2		4,900	5,782	
	3		7,600	8,968	
Cotarusi	1	4 a 6 campesinos	4,500	4,500	S/. 20,962
	2		6,500	7,670	
	3		4,765	5,622	
	4		2,000	2,360	

Fuente: Archivo CAC Los Andes (2001).

Entre 1999 y 2000, el Programa de Créditos era muy exitoso. En 2001, se propuso convertirlo en una cooperativa, siguiendo la recomendación de SOS Faim por su idoneidad para la realidad comunal, toda vez que los créditos otorgados a las comunidades se convirtieron en pasivos difíciles de recuperar. Sin embargo, las municipalidades de Cotarusi y Aymaraes rechazaron la idea por desconfianza hacia cooperativas previas fallidas y temor a manejos indebidos. Pese a ello, comuneros desplazados retornantes de Colca, Pampamarca, Iscahuaca y Cotarusi apoyaron la propuesta. Luego de tres días de intensas discusiones, el 15 de febrero de 2001 se fundó la Cooperativa de Ahorro y Crédito Los Andes Cotarusi Aymaraes, conservando los objetivos iniciales del Programa de Microcréditos (Chati, 2014).

IMAGEN 2. Asamblea de fundación de la CAC Los Andes, Cotarusi, 15 de febrero del 2001



Fuente: Archivo CAC Los Andes (2001).

Entre 1999 y 2000, se llevaron a cabo cinco campañas de crédito. Las dos primeras contaron con un fondo de 68 mil nuevos soles (17 mil por comunidad), mientras que en las siguientes se incrementaron a 136 mil nuevos soles (un aproximado de 34 mil por comunidad), beneficiando a comuneros organizados en Grupos Solidarios. Todos estos montos se transfirieron como pasivos a la CAC Los Andes, quedando a su cargo su recuperación. Según testimonios de sus fundadores, la CAC Los Andes inició operaciones con un capital inicial de 7 mil soles en activos o recurso económico disponible. A partir de la fundación de la cooperativa, los reembolsos se fijaron a plazos mensuales y semestrales con un interés del 3%. Los fondos proporcionados por SOS Faim, administrados y recuperados por el Programa de Créditos, se depositaban en la cooperativa como garantía para las comunidades beneficiarias (Chati, 2014).

TABLA 2. Transferencia de créditos administrados por IDCAA hacia CAC Los Andes: febrero de 2001

Financiamiento de SOS Faim por comunidad	Fondo administrado por "IDCAA" (s./.)	Transferidos a CAC Los Andes como aporte comunal (s./.)
Cotarusi	34.000	34.000
Colca	34.000	22.904
Iscahuaca	34.000	34.000
Pampamarca	34.000	25.926

Fuente: Archivo CAC Los Andes (2001).

3.2.2. Crecimiento, logros y malestar durante la construcción cooperativa

La CAC Los Andes inició en febrero de 2001 con 107 socios fundadores desplazados por la violencia. En pocos meses, algunos prestatarios abandonaron sus deudas al regresar a la costa, y comunidades como Iscahuaca, Mestizas y Colca se negaron a pagar, reclamando los fondos de SOS Faim como propios. En 2002, se incorporaron nuevas comunidades como socios, con los fondos de SOS Faim gestionados por la cooperativa.

TABLA 3. Convenio SOS Faim y comunidades: 2002

Comunidad Campesina	Fecha de convenio	Fondo otorgado por SOS Faim	Transferidos a CAC Los Andes como aporte comunal
Cotarusi	30-07-2002	34.000,00	34.447,29
Colca	30-07-2002	22.904,24	22.904,24
Iscahuaca	03-05-2002	34.000,24	24.850,24
Pampamarca	Julio de 2002	25.926,83	25.926,83
IDCAA	20-04-2001	50.000,00	50.000,00
San Miguel de Mestizas	Abril de 2002	34.000,00	34.209,79
Pisquicocha	30-07-2002	17.500,00	17.500,00
Totora	30-07-2002	17.500,00	18.137,82

Fuente: Archivo CAC Los Andes (2002).

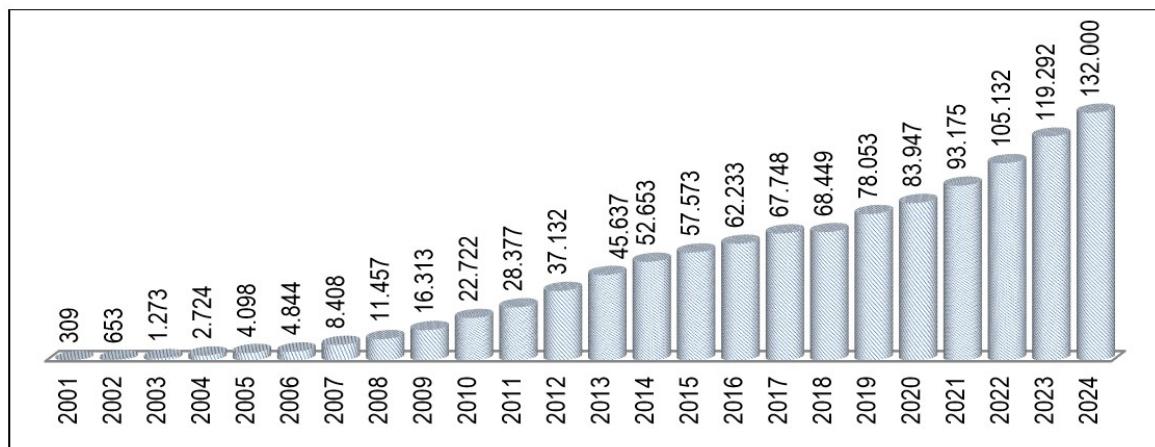
La cooperativa buscó ampliar fondos financieros mediante convenios con entidades de desarrollo rural, pero enfrentó rechazos: Cofide por alta morosidad, la Embajada de Holanda por falta de disponibilidad, FONCODES al excluir a Aymaraes, y Oxfam por objetivos no alineados. Aunque los microcréditos otorgados por FONCODES a las comunidades afectadas por la violencia política fueron en su mayoría fondos perdidos, la cooperativa ha logrado recuperar, estas sirvieron como garantía para nuevos préstamos (Memoria anual CAC Los Andes, 2002).

Entre 2002 y 2004, la cooperativa fue contraparte del Grupo Voluntariado Civil (GVC Italia) en el proyecto de seguridad alimentaria, financiado por la Unión Europea, donde se desarrolló un exitoso programa de ahorro y crédito para las comunidades de la cuenca del río Antabamba. A partir de la fecha, la cooperativa ejecuta proyectos de desarrollo rural. De noviembre de 2004 a marzo de 2006, la cooperativa ejecutó, por ejemplo, el proyecto "Desarrollo cooperativo Aymaraes" en convenio con FINDER, COMEPE, CEPES y la Fundación Ford, enfocado en fortalecer los programas agroindustriales en la localidad de Saraica. En 2004, se abrieron nuevas oficinas en Andahuaylas y Chincheros, que ya operaban desde hacía dos años (SOS Faim, 2004).

En 2004, más del 50% de los socios de Aymaraes incurrieron en morosidad. Esto se debió, principalmente, a que comunidades como Pampamarca, Colca, Iscahuaca y Cotarusi asociaban los créditos con subsidios públicos, fomentando la cultura del no pago. Además, las oficinas de Andahuaylas y Uripa enfrentaron dificultades similares. En respuesta, la cooperativa diversificó servicios y amplió su intervención a zonas como Antabamba y Andahuaylas. Hasta 2007, la mayoría de los socios seguían siendo campesinos, el personal y las tecnologías crediticias de la CAC Los Andes se adaptaban a sus necesidades locales. En 2008, la cooperativa firmó otro convenio con la Asociación Madre Coraje y CEPRODER para gestionar un fondo rotatorio en la microcuenca Virundo y Pampahuasi en la provincia de Grau, y posteriormente apoyó a intervenir en otras provincias de Apurímac y Huancavelica. Sin embargo, para 2009, debido al crecimiento de socios, se hizo cada vez más difícil mantener una relación personal y directa con ellos (Boletín CAC Los Andes: 2009).

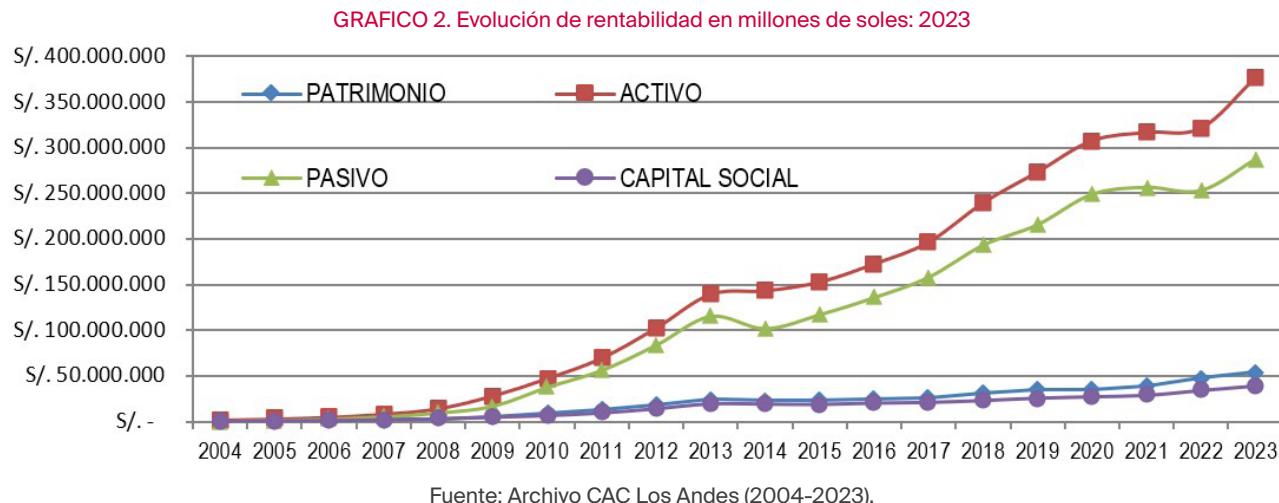
Para diciembre de 2013, la CAC Los Andes contaba con más de 45,000 socios, de los cuales el 4.37% eran menores de 18 años (1,254 socios). La cooperativa operaba con 13 agencias y más de 90 oficinas informativas en varias regiones como Apurímac, Huancavelica, Ayacucho, Cusco y Lima. Al 2024, la CAC Los Andes opera en 8 regiones del país con más de 132 mil socios. A pesar de su rápido crecimiento, algunos ejecutivos y directivos enfrentaban dificultades para gestionar adecuadamente la cooperativa. Los primeros socios, directivos y los ejecutivos de la cooperativa tuvieron que aprender mucho sobre el qué hacer cooperativo. Su personal, en su mayoría joven y quechuhablante, reflejaba el apoyo externo de ONG, municipios y los propios socios, y estaba fuertemente presente en las comunidades rurales de Apurímac y otras regiones cercanas.

GRAFICO 1. Evolución de número de socios de la CAC Los Andes



Fuente: Archivo CAC Los Andes (2024).

En diciembre de 2001, el activo total de la cooperativa era de aproximadamente 243 mil soles, cifra que superó los 139 millones en 2013. Para el cierre de 2023, sus activos, que incluyen aportaciones, ahorros de los socios, reservas cooperativas, y bienes intangibles y tangibles, alcanzaron más de 376 millones de soles. En cuanto a sus pasivos, en 2001 eran de 11 mil soles, cifra que creció a más de 115 millones en 2013 y superó los 286 millones en 2023. El patrimonio institucional pasó de 116 mil soles en 2001 a más de 54 millones en 2023. El capital social, que comenzó con 7,500 soles en 2001, llegó a más de 39 millones en 2023. A los 23 años de su fundación, la cooperativa se consolidó como un patrimonio de Apurímac.



4. Discusión

4.1. La Cooperativa y su estructura organizacional

La CAC Los Andes tiene una estructura organizativa dual. Por un lado, cuenta con una estructura asociativa, que incluye a sus socios, delegados y directivos, quienes participan en la toma de decisiones y la gestión. Por otro lado, posee una estructura empresarial compuesta por gerentes, administradores y personal ejecutivo, encargados de los servicios hacia los socios, quienes son tanto propietarios como clientes de la cooperativa.

El sentido cooperativo (practicado y soñado), conforme a sus directivos, se resume en que la esencia del cooperativismo se centra en el bienestar integral del socio, donde el ahorro y el crédito son solo herramientas, no el fin. Se busca el crecimiento holístico, abarcando necesidades vitales como consumo, educación, salud, transporte y vivienda, y no solo aspectos económicos. La cooperativa se define por valores como la democracia, igualdad, equidad, responsabilidad y solidaridad, promoviendo la participación activa de los socios y la rotación de los directivos (CAC Los Andes, 2013)².

El rápido crecimiento de la CAC Los Andes en términos económicos, financieros, número de trabajadores, socios, agencias y puntos de atención refleja su dinamismo. Sin embargo, todas las decisiones han requerido reorientaciones para alinearse con los principios cooperativos o adaptarse a la estructura actual. El Gerente General, Víctor Chatí Pérez, de origen rural y lengua materna quechua, ha desempeñado un papel clave desde la fundación de la cooperativa hasta la actualidad. Con formación en agronomía y desarrollo rural en países extranjeros como Francia, con experiencia en cooperativas y microfinanzas como exdirector de IDCAA ha sido fundamental para el fortalecimiento de la institución. A pesar de su liderazgo, muchos de los empleados han aprendido sobre el modelo cooperativo en el mismo lugar, y el concepto de cooperativa a menudo se ha entendido en términos empresariales (Planet Rating Perú, 2009: 4).

La CAC Los Andes basa la educación de sus socios en los manuales de la doctrina cooperativa, con un enfoque en preservar la naturaleza, esencia e identidad del cooperativismo. Su metodología se adapta a la identidad andina, utilizando conceptos como el Ayni y la Minka, que reflejan actividades colectivas y valores comunitarios, alineados con los principios cooperativos. Desde 2011, la CAC Los Andes ha fortalecido la educación y servicio cooperativo mediante una Unidad de Servicios Complementarios, en colaboración con diversas ONG. Los instructores se enfrentan a tres tareas clave:

1. Determinar cómo la teoría cooperativa occidental se adapta y puede ser aplicada en la cultura y economía rural andina, en un contexto de economía de mercado liberal.
2. Sistematizar las experiencias del trabajo rural en cooperativas, considerando prácticas ancestrales como el Ayni y la Minka, basadas en una economía solidaria no monetaria.
3. Explorar cómo los conceptos de ahorro y crédito se emplean dentro de estas teorías cooperativas, tanto occidentales como andinas.

2 CAC Los Andes, disponible en <http://www.cooperativolosandes.com.pe>, consultado el noviembre del 2013.

4.2. La democratización del capital y el crédito microfinanciero

Las instituciones financieras buscan maximizar el valor para los accionistas, obteniendo ganancias mediante depósitos y préstamos. Sin embargo, en el sector rural, los altos costos operativos derivados de la difícil accesibilidad, la falta de cultura crediticia y la ausencia de garantías reales hacen que los servicios financieros sean menos accesibles, especialmente en comunidades excluidas y pobres.

Hasta 2004, las comunidades más pobres de la región Apurímac poseían recursos valiosos, aunque no estaban formalmente registrados ni representados de manera que pudieran generar valor en el mercado financiero. Sin títulos de propiedad legalmente reconocidos, los campesinos no podían acceder a créditos hipotecarios ni a mecanismos tradicionales de financiación, lo que requería la búsqueda de alternativas para dar valor a sus propiedades comunales, basadas en la tradición. La tarea de la CAC Los Andes fue transformar esos recursos invisibles, en un capital dinámico que podía servir de garantía ante los créditos. Por ejemplo, a la fundación de la CAC Los Andes, las comunidades socias servían de garantía bajo acuerdo mutua para que sus miembros accedan a créditos sin la imperiosa necesidad de entregar a la cooperativa documentos legales sobre sus propiedades. Los grupos solidarios se ayudaban mutuamente para garantizar el aporte de sus créditos. Frente a esta situación, la titulación de tierras ha buscado transformar el “capital muerto” de los pobres en “capital vivo”, permitiendo a los campesinos acceder a créditos (De Soto, 2000). Para la CAC Los Andes, operar en el sector rural implica riesgos significativos debido a factores climáticos y fluctuaciones de precios en los cultivos. No obstante, la diversificación geográfica de la cooperativa ha ayudado a mitigar estos riesgos, ya que sus oficinas en distintas provincias de Apurímac y regiones cercanas permiten adaptarse a diferentes tipos de cultivos y exposiciones a fenómenos climáticos. La CAC Los Andes demostró que es posible unir pequeños ahorros de personas pobres para redistribuirlos en su beneficio. Estas prácticas permitieron que, en 2013, la cooperativa fuera reconocida por CONVEAGRO como la más eficiente en ofrecer financiamiento a agricultores, ganaderos, artesanos y comerciantes de Apurímac. En 2018, recibió un reconocimiento del Vaticano y, además, obtuvo el respaldo de diversas instituciones nacionales e internacionales. Este reconocimiento resalta la importancia de la cohesión social y el desarrollo local impulsado por el microcrédito y la ayuda mutua entre la cooperativa y sus socios.

4.3. Cooperación interinstitucional y focos de desarrollo local

La CAC Los Andes promueve el dinamismo asociativo en sus agencias y oficinas, enfocándose en actividades agropecuarias, pequeños comercios y servicios rurales, como talleres mecánicos y restaurantes. Asesora a organizaciones campesinas, cooperativas y empresas productivas, impulsando el desarrollo local. Desde 2008, se ha vinculado con ECOSOL (Proyecto de Economía Solidaria) para promover microempresas y cooperativas en sectores como agricultura y comercio. La Unión Europea prioriza sus actividades en comercio, desarrollo rural e integración regional. Además, entidades como GVC Italia, SOS Faim, Madre Coraje, CEPRODER, COMYPE, Clínica Santa Teresa, ZME, CESAL, ONLUS y CEDES, entre otras, han apoyado a la cooperativa con proyectos en áreas como seguridad alimentaria, salud, y cadenas productivas. Las intervenciones no crediticias se realizan a través de alianzas con ONG, organizaciones sociales, cooperantes y el Estado (SOS Faim, 2004, 2009). La cooperativa ofrece servicios complementarios como campañas de salud, capacitaciones, asistencia técnica en agricultura, negocios y formación de cooperativas, contribuyendo al desarrollo integral de sus socios y del país.³ Además, promueve la revalorización de costumbres y tradiciones ancestrales para preservar la relación armónica con la naturaleza.

Al 2024, la CAC Los Andes interviene principalmente en zonas rurales de los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Cusco, Puno, Arequipa y Junín, donde la población es mayoritariamente quechua hablante, además, con una agencia de operaciones en la ciudad de Lima⁴. Los locales fueron construidos mediante la participación activa de los socios. En algunos casos los terrenos han sido donados por las comunidades. El personal de la cooperativa, especialmente los operarios de crédito que mantienen vínculos estrechos con los socios también son quechua hablantes. La cooperativa promueve actividades basadas en los principios del Ayni y la Minka, participando en faenas comunales y festividades locales, lo que facilita el contacto directo con los socios. Busca integrar la cultura local en sus prácticas económicas, adaptándose a las tradiciones para ser vista como parte integral de la vida de los socios. El objetivo es que la cooperativa no solo proporcione recursos financieros, sino que también apoye el desarrollo personal y comunitario, reflejando la filosofía y cultura local en un contexto post-violencia política.

Las zonas más empobrecidas de Apurímac enfrentaban dificultades para acceder a créditos tradicionales debido a la falta de formalización de activos y registros legales sobre propiedades comunales. La CAC Los Andes superó este desafío transformando estos recursos en capital mediante acuerdos mutuos, grupos solidarios y el respaldo de la comunidad campesina. A diferencia de otras entidades financieras, que requerían títulos verificables, la cooperativa se basó en la tradición comunal para el control de las propiedades. (Chatí, 2014). En Perú, el Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural (PETT) fue creado en 1992, pero fue a partir de 1996, con el programa COFOPRI, cuando se comenzó la titulación masiva de tierras para formalizar la propiedad comunal y permitir su incorporación al mercado, incluyendo el acceso a créditos (Althaus, 2007: 63-69). El proceso de formalización de propiedades en Apurímac generó conflictos sociales, especialmente con las comunidades campesinas. Aunque COFOPRI logró formalizar algunas propiedades urbanas, las tierras rurales comunales aún no fueron reconocidas, dificultando el acceso a créditos. Hasta

3 Unidad de Servicios Complementarios. Disponible en: <https://cooperativalosandes.com.pe/complementarios>

4 Las principales oficinas ubicadas en los centros urbanos, se puede visualizar en la página web de la cooperativa: <https://cooperativalosandes.com.pe/kaypi-cooperativa-2>

2013, solo se habían entregado 2816 títulos urbanos, mientras que las propiedades comunales no estaban formalizadas. Esto limitó el acceso a créditos hipotecarios en el sector rural, lo que llevó a las entidades financieras a enfocarse en zonas urbanas. Sin embargo, la industria del microcrédito se adaptó, mejorando la calidad de sus servicios y productos.

4.4. Modelo cooperativo en contextos de regulación y desarrollo

Entre 2010 y 2016, se instalaron en Apurímac y regiones vecinas más de medio centenar de cooperativas financieras, a pesar del alto índice de pobreza. Estas operaron fuera de los sistemas de regulación de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) o FENACREP. Muchas estuvieron vinculadas a lavado de activos, fraudes, estafas piramidales y apropiación ilícita, mientras otras desaparecieron tras pocos meses de operación (Pilco, 2015).

En respuesta, el poder legislativo, FENACREP y las cooperativas impulsaron un nuevo marco normativo que permita a la SBS supervisar a estas entidades. En este contexto, la CAC Los Andes y otras cooperativas formales enfrentan la incertidumbre y la sospecha tanto de sus socios como de las entidades fiscalizadoras.

A pesar de las críticas, el modelo cooperativo sigue siendo promovido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como una forma moderna y renovada de asociación (OIT, 2022). Sin embargo, es frecuentemente ignorado o considerado anticuado, reflejando la desconexión entre las políticas económicas globales y las alternativas locales (Montoya *et al.*, 2017). Las prácticas económicas enfrentan restricciones impuestas por fuerzas macroeconómicas e internacionales que privilegian la acumulación de capital (Ávalos, 2023). Persisten, además, los paradigmas occidentales, mientras que enfoques participativos y comunitarios podrían ofrecer oportunidades para que las comunidades diseñen programas y evaluaciones basados en sus prioridades, conocimientos y visiones culturales del bienestar (Arquer-Cuenca y Hernández-Peña, 2024).

5. Conclusión

Origen y expansión de la CAC Los Andes: La cooperativa fue constituida por comunidades campesinas en 2001 a partir de programas sociales y de microcréditos financiado por cooperantes internacionales, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida en las zonas rurales afectadas por la violencia política. A lo largo de sus más de 23 años de existencia, ha mostrado un crecimiento sostenido tanto en términos de servicios financieros como en su expansión asociativa y geográfica, abriendo nuevas agencias en varias regiones del país, con prioridad hacia la población rural quechua hablante.

Compromiso con el desarrollo rural y la economía solidaria: A pesar de su enfoque financiero, la CAC Los Andes va más allá de ser una simple entidad crediticia. Su labor se centra en promover el desarrollo integral de las comunidades rurales y urbanas a través de actividades productivas y programas sociales, ejecutados en colaboración con ONG nacionales e internacionales. Esto le permite ofrecer un modelo económico basado en los principios de la economía solidaria.

Relación contradictoria con el Estado: A lo largo de su historia, la cooperativa ha enfrentado una relación conflictiva con el Estado, lo que ha generado desafíos en su implementación y expansión. Esta contradicción subraya la tensión existente entre las políticas del Estado y el cooperativismo, que ha intentado siempre equilibrar la gestión financiera con el desarrollo social en un contexto de exclusión y desigualdad.

6. Fuente de financiación

Cooperativa de Ahorro y Crédito Los Andes Cotarusi Ayamaraes.

7. Referencias bibliográficas

- Althaus, J. (2007): *La revolución capitalista en el Perú*, Lima, Fondo de cultura económica del Perú.
- APRODEH - Asociación Pro Derechos Humanos (2010): *El conflicto armado interno en las provincias de Abancay y Aymaraes (Bases para su estudio)*, Lima, APRODEH.
- Arquer-Cuenca, E. y Hernández-Peña, L. (2024): "La evolución de los programas de desarrollo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la primera década del siglo XXI: Una revisión sistemática", *Revista Española de Desarrollo y Cooperación* (REDC), 51(2), 289-302. Disponible en: <https://dx.doi.org/10.5209/rede.90737>
- Ávalos, E. (2023): *La Economía Social y Solidaria*. Documento de Trabajo 01, Grupo de Investigación Omega Gamma, Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Azabache, P. N. (2024): "Implementación de Políticas Públicas y Desarrollo Sostenible en Perú: Una Revisión Sistemática de Prácticas y Resultados", *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 5(4), pp. 2171-2184. Disponible en: <https://doi.org/10.56712/latam.v5i4.2404>.
- CAC Los Andes (2005 - 2009): *Boletín institucional de la cooperativa de ahorro y crédito Los Andes Cotarusi Aymaraes*. CAC Los Andes.
- CAC Los Andes (2008-2014): *Revista institucional de la cooperativa de ahorro y crédito Los Andes Cotarusi Aymaraes*. Febrero 2008. Febrero 2010. Febrero 2011. Febrero 2012. Febrero 2013 y febrero 2014. CAC Los Andes.
- CAC Los Andes (2011-2013 y 2018-2023): *Memoria Anual, Cooperativa de Ahorro y Crédito Los Andes*. Gestión años 2011, 2012, 2013, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. Disponible en: <https://cooperativalosandes.com.pe/memorias-anuales>

- Chati, G. (2014): *Cooperativismo en Los Andes. Origen y construcción de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Los Andes Cotarusi Aymaraes*. Abancay, CAC Los Andes.
- Comisión de la Verdad y Reconciliación – CVR (2003): *Informe final, Tomo IV*, sección 3. Disponible en www.cvr.com.pe
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2018): *La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe*, Santiago, Naciones Unidas. Disponible en: <https://repositorio.cepal.org/handle/11362/40155>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2019): *Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas: una mirada hacia América Latina y el Caribe 2019-2020 / CEPAL, FAO, IICA*. Disponible en: <https://hdl.handle.net/11362/45111>
- De Soto, H. (2000): *El misterio del capital*. Lima, Editora El Comercio.
- Escobar, A. (2007): *La invención del Tercer Mundo. Construcción y deconstrucción del desarrollo*. Caracas, Fundación Editorial el perro y la rana.
- Espinoza, G. S. y Guamán, D. Y. (2023): *Impacto de las microfinanzas en la vulnerabilidad social del Perú (2012-2018)*, (Tesis para optar por el Título Profesional de Economista), Lima, Universidad de Lima.
- Gómez, A. (2013): *Cooperativismo*, Lima, Cooperativa de Ahorro y Crédito Los Andes Cotarusi Aymaraes.
- Instituto Nacional de Estadística e Informativa (INE) (2000): *Conociendo Apurímac*, Lima, INEI.
- Montoya, L. (2017): *¿Otras economías?: Experiencias económico sociales y solidarias en el Perú*, Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Municipalidad Distrital de Cotarusi (2003): *Plan de Desarrollo Integral del Distrito de Cotarusi Aymaraes Apurímac*, Abancay, Municipalidad Distrital de Cotarusi.
- Municipalidad Distrital de Cotarusi (1998): *Municipalidad Distrital de Cotarusi*, Abancay, Municipalidad Distrital de Cotarusi.
- Municipalidad Distrital de Cotarusi (1996): *Concertando voluntades para reconstruir Cotarusi*, Abancay, Municipalidad Distrital de Cotarusi.
- Ortiz, H. (2000): *Estado y economía solidaria, hacia un orden latinomericano nuevo y mundial*, Lima, Instituto de Desarrollo Urbano. Disponible en: https://www.socioeco.org/bdf_fiche-document-1140_es.html
- Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2022): *Foco en la protección social y las Cooperativas*. Disponible en: https://www.idelcoop.org.ar/sites/www.idelcoop.org.ar/files/revista/articulos/pdf/48_-_oit.pdf
- Palacios, E. (2001): "El crédito agrario en el Perú", *Revista de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM*, VI(20), pp. 73-90.
- Pilco, P. (2015): *La invasión de cooperativas en Apurímac y el lavado de dinero*. Disponible en: <https://www.proetica.org.pe/poder-ciudadano/la-invasion-de-cooperativas-en-apurimac-y-el-lavado-de-dinero/>
- Planet Rating Perú S.A. (2009): *The global microfinance Rating Agency*, Lima, Planet Rating Perú S.A.
- Portocarrero, F., Trivilli, C. y Alvarado, J. (2002): *Microcrédito en el Perú: Quiénes piden, quiénes dan*, Lima, CIES, CIUP, IEP y CEPES.
- Remy, M. (2007): *Cafetaleros empresarios. Dinamismo asociativo para el desarrollo en el Perú*, Lima, Oxfam – IEP.
- Seijas-Giménez1, M. N., Vivel-Búa, M., Lado-Sestayo, R. y Fernández-López, S. (2017): "La evaluación del riesgo de crédito en las instituciones de microfinanzas: estado del arte", *COMPENDIUM*, 4(9), pp. 36-52. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6230472>
- SOS FAIM (2009): "Zoom Microfinanzas. La cooperativa Los Andes: finanzas solidarias para el desarrollo rural", Boletín informativo de microfinanzas, 29.
- SOS FAIM (2004): "Zoom Microfinanzas", Boletín informativo de microfinanzas, 4.
- SOS FAIM (2001): "Zoom Microfinanzas", *Boletín informativo de microfinanzas*, (2).
- Trivelli, C. (2004): *La oferta financiera rural en el Perú: Elementos para una agenda de trabajo*, Lima, IEP.
- Trivelli, C. y Tarazona, A. (2007): *Riesgos y portafolios agropecuarios: Lecciones desde la experiencia de instituciones financieras de américa latina*, Lima, IEP.